



Marea verde
Comunidad de Madrid

PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA PÚBLICA



La privatización de la enseñanza en la Comunidad de Madrid es un hecho consumado que sigue queriendo ampliar sus expectativas. Se usurpa la igualdad de oportunidades por una “libertad de elección” ficticia, que solo beneficia a quienes están por encima del índice de pobreza y vulnerabilidad, dejando a todos los demás sin derechos, ni libertad, ni elección. Una Comunidad en la que sus dirigentes políticos cacarean la palabra libertad desconociendo su verdadero significado.

Miles de estudiantes van quedando desahuciados del sistema educativo en contra de su voluntad. A la administración regional poco le importa este alumnado y el futuro que les depare su vida. Incomprensiblemente las “becas y ayudas”, con las que se está desviando dinero público de todos y todas las madrileñas hacia la privada, se dirigen como perceptoras incluso a familias con rentas superiores a 100.000 €.

A través de las diferentes etapas educativas vamos encontrándonos diferentes modalidades de privatización, todas conducen a lo mismo: restar oportunidades a la población más vulnerable.

Los cheques escolares para escolarización en centros privados son un escándalo de creación de desigualdad y privatización del servicio público de educación. En todas sus modalidades: cheques guardería, FP y Bachillerato.

El extraordinario aumento que, por acuerdo con VOX para la aprobación de los presupuestos madrileños, el gobierno de Ayuso ha llevado a cabo, continúa transfiriendo el dinero de todos los madrileños y madrileñas a las empresas privadas de educación, mientras la red pública, la única que no dogmatiza y a la que puede acceder todo el alumnado, desaparece.

En el colmo de afán de creación de negocio educativo ha convertido las becas de Segunda Oportunidad en otro recurso más para la escolarización en centros privados. Una beca financiada con fondos europeos que pretende dar cobertura al alumnado que abandona por motivos económicos familiares, es decir, que necesitan aportar ingresos a sus familias, se convierte aquí en otro mecanismo



de financiación del coste de una plaza privada, manipulando la finalidad de dichas ayudas que, aunque en teoría puede solicitar cualquier alumno o alumna, en realidad no lo hacen, puesto que solo se destina al coste de la plaza, que en pública es gratuita. Situación ésta que no tienen ni siquiera en Comunidades Autónomas gobernadas también por el Partido Popular, como es el caso de Andalucía.

Pero, por supuesto, existen otras medidas de privatización, que la Plataforma Regional por la Escuela Pública viene denunciando desde hace muchos años: la principal es la planificación de puestos escolares, mecanismo por el que la Administración Educativa desvía, anualmente, plazas públicas a los centros privados concertados; la inexistencia de enseñanzas deportivas de ciclos de Formación Profesional en centros públicos; la supresión del ciclo 3-6 años en las escuelas infantiles públicas, que dinamita un modelo específico de éxito, que ya no se encontrará en la oferta pública pero sigue existiendo en la red privada.

La Comunidad de Madrid es líder en externalizar y privatizar, asfixiando y torturando a los servicios públicos y con ellos, a toda la ciudadanía que los financia y en muchos casos dependen de lo público para poder tener una vida mínimamente digna y no quedarse al margen, porque segregar es crear una sociedad con conflictos, desigual y con menos posibilidades de avanzar.

Sobran palabras huecas y faltan hechos; no hay libertad, no hay educación y no hay buena gestión. Lo público es para la Consejería un problema que no tiene más remedio que gestionar o delegar, que es lo que hace, en las direcciones de los centros. Si les queda un ápice de decencia deberían reconsiderar esta línea privatizadora y retornar el dinero público para los servicios públicos y para mejorar la vida de los más vulnerables.

La excelencia, la equidad, la igualdad de oportunidades, la encontramos en la Escuela Pública, es donde hay que invertir. La educación es un derecho fundamental que la administración debe garantizar, independientemente del poder adquisitivo, de manera gratuita y en igualdad de condiciones a través de los servicios públicos.

Desde la Plataforma Regional realizaremos cuantas actuaciones consideremos necesarias para seguir denunciando estas situaciones que atentan directamente contra los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid.

Madrid, 9 de mayo de 2022.

